

Los citados límites vienen definidos por los puntos de coordenada U.T.M. del plano 5v (37-42) que se especifican a continuación:

Punto NW	30 TVK	3418086500
Punto NE	30 TVK	3470086640
Punto SE	30 TVK	3488086240
Punto SW	30 TVK	3422086100

Madrid, 9 de enero de 1990.

SERRA I SERRA

2159 ORDEN 342/38100/1990, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden número 53/1981, de 9 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 98), en la que se señala la zona de seguridad de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

A fin de mejorar en todas las direcciones el aislamiento y defensa inmediata de la Base Aérea de Torrejón y asegurar el empleo eficaz de sus medios sobre los sectores de actuación que tuviere encomendadas, es preciso modificar la Orden número 53/1981, de 9 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 98), en la que se señala la zona de seguridad de la citada instalación militar.

En su virtud y de conformidad con el Reglamento de «Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional», aprobado por Real Decreto número 689/1978, de 10 de febrero («Boletín Oficial del Estado» número 89), así como con el informe emitido por el Estado Mayor del Aire, a propuesta razonada del Capitán General de la Primera Región Aérea, dispongo:

Artículo único.—Queda modificado el artículo segundo de la Orden número 53/1981, de 9 de abril, en el sentido de que la nueva zona próxima de seguridad de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, estará comprendida entre el perímetro de la propiedad militar y el polígono que tiene como vértice las coordenadas UTM siguientes:

A = 30T VK 59498409	I ₂ = 30T VK 61908090
B = 30T VK 63358416	I ₃ = 30T VK 61908088
B ₁ = 30T VK 63358440	I ₄ = 30T VK 61918090
B ₂ = 30T VK 63758441	I ₅ = 30T VK 61998082
C = 30T VK 63868285	I ₆ = 30T VK 62028885
D = 30T VK 65388281	I ₇ = 30T VK 62058082
E = 30T VK 65348109	J = 30T VK 60958102
F = 30T VK 63568113	K ₁ = 30T VK 59757981
G = 30T VK 62858037	K ₂ = 30T VK 59047976
H = 30T VK 62548072	L = 30T VK 59038023
I ₁ = 30T VK 61808023	M = 30T VK 59698079

Madrid, 9 de enero de 1990.

SERRA I SERRA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

2160 ORDEN de 20 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 10 de abril de 1989, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia emitida por la Audiencia Nacional respecto del recurso contencioso-administrativo relativo al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 10 de abril de 1989 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada en 28 de noviembre de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados respecto de un empréstito emitido por «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima», por importe de 5.000 millones de pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» del 28), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.—Estimar el recurso de apelación promovido contra la sentencia dictada en 28 de noviembre de 1986 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que se revoca.

Segundo.—Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de 2 de diciembre de 1983 y la resolución de 13 de junio de 1984, que se declaran ajustadas a Derecho, y Tercero.—No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de diciembre de 1989.—P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

2161 ORDEN de 20 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 17 de abril de 1989, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia emitida por la Audiencia Nacional respecto del recurso contencioso-administrativo número 25.048, relativo al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 17 de abril de 1989 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada en 27 de febrero de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, recurso número 25.048, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados respecto de un empréstito emitido por la «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), por importe de 17.000 millones de pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.—Estima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.

Segundo.—Revoca la sentencia dictada con fecha 27 de febrero de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 25.048, que anuló las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Hacienda con fechas 9 de enero y 20 de junio de 1984, que denegaron la bonificación de la base del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados correspondiente a la cancelación del empréstito de 17.000 millones de pesetas con destino a la financiación de determinadas centrales eléctricas.

Tercero.—No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en ninguna de las dos instancias de este recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de diciembre de 1989.—P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

2162 ORDEN de 20 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 5 de junio de 1989, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia emitida por la Audiencia Nacional respecto del recurso contencioso-administrativo relativo al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 5 de junio de 1989 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada en 17 de octubre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados respecto de un empréstito emitido por «Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima», por importe de 3.600 millones de pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación promovido por el señor Letrado del Estado en la representación que le es propia, contra la sentencia de 17 de octubre de 1987, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Nacional en el recurso del mismo orden jurisdiccional a que

este rollo se contrae, en el que fue parte en concepto de apelada la "Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima", en su acreditada representación, revocamos la expresada resolución y, en consecuencia, desestimamos el recurso interpuesto por "Hidroeléctrica de Cataluña" contra la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de abril de 1983, que desestimó el recurso de reposición formulado contra la Orden del mismo Departamento de 23 de julio de 1980 sobre la concesión de beneficios fiscales, por ser los actos combatidos conformes al ordenamiento jurídico, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ninguna de ambas instancias.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de diciembre de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

2163 *ORDEN de 20 de diciembre de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 10 de mayo de 1989, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia emitida por la Audiencia Nacional respecto del recurso contencioso-administrativo número 25.268, relativo al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 10 de mayo de 1989 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada en 19 de abril de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, recurso número 25.268, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados respecto de un empréstito emitido por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima» (ENHER), por importe de 7.500 millones de pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.-Estima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.

Segundo.-Revoca la sentencia dictada con fecha 19 de abril de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 25.268.

Tercero.-Declara ajustadas a derecho las Ordenes dictadas por el Ministerio de Hacienda con fechas 1 de junio y 6 de noviembre de 1984, la última que confirmó la anterior, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra la anterior por la Entidad "Enher, Sociedad Anónima".

Cuarto.-No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en ninguna de las dos instancias de este recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de diciembre de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

2164 *ORDEN de 28 de diciembre de 1989 por la que se habilita como Punto de Costa de 5.ª clase el Muelle de La Lagoa (Pontevedra) para el desguace de buques y despacho de productos resultantes.*

La Empresa «Sestelo y Cia., Sociedad Anónima», solicita de este Ministerio la habilitación de las instalaciones de las que es concesionaria por Acuerdo de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, situadas en el Muelle de La Lagoa (Pontevedra), para el desguace de buques, justificando su petición en los gastos y retrasos derivados del traslado de buques desde un lugar habilitado para despacho aduanero a las instalaciones donde se realiza el desguace;

Visto el Decreto 1412/1966, de 2 de junio, que faculta al Ministerio de Hacienda para reestructurar la organización de los Servicios de Aduanas, mediante la creación, supresión o variación del grado de habilitación de las Oficinas de la Renta,

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero.-Se habilita el Muelle de La Lagoa (Pontevedra) como Punto de Costa de 5.ª clase para el atraque y despacho de buques que se importen para ser desguazados en las instalaciones de la Empresa

«Sestelo y Cia., Sociedad Anónima», así como, en su caso, el despacho de las partes y elementos de los mismos.

Segundo.-Los despachos se verificarán con intervención y documentación de la Aduana de Vigo.

Madrid, 28 de diciembre de 1989.

SOLCHAGA CATALAN

2165 *ORDEN de 29 de diciembre de 1989 por la que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades de Previsión Social de la Entidad denominada «Mutualidad de Previsión de Funcionarios del Servicio de Extensión Agraria».*

Ilmo. Sr.: La Entidad denominada «Mutualidad de Funcionarios del Servicio de Extensión Agraria» se inscribió en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social con el número 3.091, por Resolución de fecha 30 de julio de 1979, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución dictada al amparo de lo dispuesto en la derogada Ley de 6 de diciembre de 1941, y del también derogado Reglamento para su aplicación de 26 de mayo de 1943, sobre régimen de Montepío y Mutualidades.

Con fecha 29 de junio de 1988, la Asamblea general extraordinaria de dicha Mutualidad adoptó el acuerdo de disolución y liquidación.

Habiéndose cumplimentado los trámites exigidos por el artículo 39 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, de 4 de diciembre de 1985, visto lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, teniendo en cuenta el informe favorable de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien:

Primero.-Declarar extinguida y eliminada a la Entidad denominada «Mutualidad de Previsión de Funcionarios del Servicio de Extensión Agraria».

Segundo.-Acordar su eliminación del Registro Especial de Entidades de Previsión Social, artículo 13 del mencionado Reglamento de Entidades de Previsión Social, de 4 de diciembre de 1985, y artículo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 29 de diciembre de 1989.-P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

2166 *ORDEN de 3 de enero de 1990 por la que se acuerda la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.186/1988, referente a la apertura en la Comunidad de Castilla y León de oficinas para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y la Caixa de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 3 de abril de 1989 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 1.186/1988, interpuesto por el Procurador don Alejandro González Salinas, en nombre y representación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y once Cajas de Ahorros más contra la sentencia dictada en fecha 19 de febrero de 1988 por la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en su pleito número 17.691/1987, sobre apertura en la Comunidad de Castilla y León de oficinas para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y la Caixa de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares.

Considerando que no concurren en el presente caso las circunstancias establecidas en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, para la inexecución o suspensión de la sentencia citada.

Este Ministerio ha acordado disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto en nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Católico de Obreros de Burgos, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, Caja de Ahorros Provincial de Zamora, Caja de Ahorros Popular de Valladolid, Caja General de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, Caja de Ahorros Municipal de Burgos y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 19 de febrero de 1988, recaída en el recurso tramitado ante la